

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/265382054>

# Somma and Bargsted 2014 La Autonomización de la Protesta en Chile (preliminary version)

Chapter · January 2014

CITATION

1

READS

372

## 2 authors:



**Nicolás Somma**

Pontifical Catholic University of Chile

**51** PUBLICATIONS **221** CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



**Matías Bargsted**

Pontifical Catholic University of Chile

**23** PUBLICATIONS **210** CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

## Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Social media and protest [View project](#)



Strikes and repression [View project](#)

# La Autonomización de la Protesta en Chile<sup>1</sup>

*Nicolás M. Somma*

*Matías A. Bargsted*

*Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile*

*Capítulo del libro (por aparecer) "Socialización Política y Experiencia Escolar: Aportes para la Formación Ciudadana en Chile" (Editores Cristián Cox y Juan Carlos Castillo)*

**Resumen:** Este capítulo argumenta que durante las últimas dos décadas se ha producido en Chile un proceso de *autonomización de la protesta*, esto es, una creciente desconexión entre los movimientos sociales y la institucionalidad política formal, particularmente la de centro-izquierda. Rastreamos este proceso empíricamente en dos niveles. Por una parte, consideramos desde un punto de vista histórico cómo variados movimientos sociales y los partidos de centroizquierda se han distanciado progresivamente en términos de objetivos y estrategias durante las últimas dos décadas. Por otra, empleamos datos de la Encuesta Mundial de Valores para demostrar que la asociación estadística entre variadas formas de participación en protesta y múltiples indicadores de afición política han decrecido sistemáticamente con el paso del tiempo, aunque no necesariamente en forma lineal. Argumentamos que para explicar este proceso deben considerarse, al menos, dos factores claves. En primer lugar, las características específicas de la institucionalidad política imperante, tales como el sistema binomial o la ausencia de mecanismos vinculantes de democracia directa, han permitido que los principales partidos políticos chilenos aseguren su sobrevivencia sin tener que apoyarse directamente sobre la sociedad civil organizada. Segundo, cambios en disponibilidad de recursos económicos y sociales, así como en la configuración valórica de la población, han permitido e incentivado que los mismos movimientos sociales no busquen apoyo en las estructuras partidistas tradicionales.

## INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene dos objetivos. El primero es documentar empíricamente, para el Chile de finales de los 80s hasta la fecha, un proceso de “autonomización de la protesta”. Por dicha expresión nos referimos al progresivo debilitamiento de los vínculos entre los movimientos sociales - cuya principal táctica es la protesta colectiva - y las instituciones políticas formales (partidos políticos y clase política). La protesta se “autonomiza” en el sentido de que sus principales protagonistas – los movimientos sociales – dejan de estar al alero de los

---

<sup>1</sup> Agradecemos el financiamiento del CONICYT a través del COES (Centre for Social Conflict and Cohesion Studies, CONICYT/FONDAP/15130009) y del proyecto FONDECYT *Iniciación en Investigación* 11121147 (La difusión de la protesta en Chile). También agradecemos los excelentes comentarios de Alejandro Corvalán, Paulo Cox, Cristián Cox, y los asistentes al taller que tuvo lugar en el CEPPE el 25 de junio de 2014.

actores políticos tradicionales en Chile, como son los partidos políticos (específicamente nos referimos en este capítulo a los partidos de centro e izquierda). El segundo objetivo es ofrecer una explicación tentativa de este proceso.

La autonomización de la protesta puede rastrearse en dos niveles, el de los actores colectivos y el individual. Respecto al primero, examinamos con narrativas históricas cómo los movimientos sociales y los partidos se distancian en términos de objetivos y estrategias políticas a lo largo que avanza el período en cuestión. Respecto al segundo, mostramos con datos de encuestas representativas de la población adulta chilena que, al principio del período, quienes participaban en protestas estaban mucho más cercanos al sistema político – en términos de comportamientos y actitudes tales como confianza e interés – que quienes no protestaban. Sin embargo tales diferencias van decreciendo a medida que pasa el tiempo: los activistas se vuelven crecientemente desafectos hacia la política formal en mayor medida que el resto.

El capítulo tiene cuatro secciones. La primera rastrea la autonomización de la protesta a nivel de los principales actores colectivos en base a un relato histórico basado en fuentes secundarias. La segunda sección examina la tesis de la autonomización a nivel individual con datos de encuesta. La tercera presenta una explicación tentativa sobre por qué ocurrió este proceso, y la cuarta sección concluye.

## **1) LA AUTONOMIZACION DE LA PROTESTA: ACTORES COLECTIVOS**

### **Segunda mitad de los 80s: articulación entre actores políticos formales y movimientos sociales**

La dictadura de Pinochet (1973-1990) reprimió y desactivó las organizaciones populares que tan decisivas habían sido durante el período de la Unidad Popular y, más generalmente, desde los inicios del siglo XX (sindicatos, mutualistas, organizaciones estudiantiles, partidos políticos, organizaciones vecinales, etc.). Con ello se cortó de raíz la tradición nacional de llevar adelante grandes protestas públicas para hacer escuchar las demandas sociales (De la Maza 2003). Tras una década de silencio y resistencia clandestina la protesta popular empezó a desarrollarse – bajo la forma de “jornadas de protesta nacional” - a partir de 1983. Ello fue en parte consecuencia de la grave crisis económica que azotó al país, y que entre otras cosas supuso altos niveles de desempleo, inflación y pauperización de las clases populares. El intento de asesinato del dictador en 1986 por parte de integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sin embargo, tuvo como respuesta un aumento de la represión que terminó con la incipiente protesta de los tres años anteriores.

Recién con la cercanía del plebiscito de 1988, que abría por primera vez la posibilidad de remover del poder a Pinochet por vías pacíficas, empezó a organizarse una oposición visible por parte de las fuerzas sociales y políticas opuestas al régimen. Lo importante para nuestro argumento es que esta protesta estaba liderada y coordinada, en sus tácticas y objetivos, por los líderes de los partidos reprimidos por el régimen (Socialista, Comunista y Radical, así como la Democracia Cristiana). A ellos se sumaron organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de supervivencia (como ollas populares). Estas últimas habían surgido para cubrir las necesidades básicas de los sectores populares durante

la crisis económica de los 80s al margen de los actores políticos ilegalizados y reprimidos (De la Maza 2003). Si bien no estaban necesariamente integradas por líderes partidarios, estas organizaciones tenían fuertes vínculos con los partidos de centro e izquierda.

El objetivo común de derribar a Pinochet y restaurar la democracia – un tipo de régimen con el que Chile ya tenía varias décadas de experiencia (Valenzuela y Valenzuela 1983) – fue fundamental para cohesionar a las organizaciones civiles y los partidos políticos. Las diferencias fueron subsumidas, minimizadas y canalizadas: ambos mundos estaban articulados.

### **Los 90s: divorcio entre la política institucional y los movimientos sociales**

Los vínculos entre los movimientos sociales por un lado, y la política institucional de los partidos de centro-izquierda y el parlamento por el otro, comienzan a erosionarse desde la restauración democrática de 1990. En primer lugar, al obtenerse la democracia, la protesta antiautoritaria obviamente pierde su razón de ser: el enemigo militar que cohesionaba a partidos y organizaciones sociales había sido desplazado (aunque sólo parcialmente dado el rol que mantenía Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército y la presencia de enclaves autoritarios como los senadores designados, ver Garretón 1991). De todos modos no existían razones tan imperiosas para que las organizaciones sociales y los partidos políticos progresistas (ahora aunados en la flamante coalición de gobierno Concertación por la Democracia) continuaran ligados. Las épicas protestas de fines de los 80s desaparecieron. En el gobierno estaban, precisamente, muchos de los que habían protestado en aquel momento: no tenía sentido seguirlo haciendo al estar en el poder.

En segundo lugar, las movilizaciones masivas que habían caracterizado buena parte de los 80s eran consideradas peligrosas para el nuevo gobierno dada la fragilidad de la incipiente democracia (Garretón 1996). Los líderes de la coalición tenían claro que la movilización social había generado gran inestabilidad durante el período de la Unidad Popular y que eso había contribuido al quiebre institucional. Las grandes movilizaciones fueron remplazadas por protestas más focalizadas y de menor convocatoria por parte de empleados públicos y trabajadores mineros (De la Maza 1999), y los líderes sociales tuvieron un lugar restringido en el nuevo escenario (Hipsher 1996, Roberts 1998). Primó la llamada “política de los consensos”, por medio de la cual las decisiones políticas de envergadura eran adoptadas por las élites políticas sin mayor influjo de la ciudadanía organizada (Huneus 1999b, Siavelis 2012).

Finalmente, el entusiasmo con la vuelta a la democracia también restringió los impulsos de las organizaciones sociales para convocar a grandes marchas de protesta contra el gobierno. Ciertamente había grandes expectativas de cambio, pero era necesario dar tiempo al gobierno para satisfacerlas.

### **Fines de los 90s: emergencia del malestar**

Aunque el triunfo del NO en el plebiscito de 1988 no fue abrumador (el 44% de los votantes se opuso a la vuelta a la democracia), el evento fue percibido unánimemente como un momento decisivo en la vida del país. Ambos bandos en disputa – quienes apoyaban y

quienes se oponían a Pinochet – habían realizado extenuantes esfuerzos por movilizar a los votantes, lo que se tradujo en una amplia concurrencia a las urnas (98% de los inscritos) y altísimos niveles de politización, interés y movilización. Y los partidos políticos que volvieron a la escena con las elecciones de 1990 eran vistos con buenos ojos por la ciudadanía dado que habían logrado transitar pacíficamente a un nuevo régimen. Así, de acuerdo con la encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP) de 1993, más del 80% de la población mencionaba sentirse cercano a un partido político o simpatizaba con él.

Esta situación, que combinaba la ausencia de grandes movilizaciones colectivas contra el gobierno con altos niveles de afección política, ya para finales de los 90s empieza a mostrar signos de agotamiento. Se activa en la esfera pública y en la academia un debate acerca del “malestar” en la sociedad chilena liderado por el informe del PNUD de 1998 (PNUD 1998, Lechner, 2000). En él se argumentaba que la subjetividad de los chilenos estaba siendo vulnerada por las tendencias modernizadoras asociadas al proceso de desarrollo económico que experimentaba el país en aquel momento (Brunner 1998 para una perspectiva crítica de este enfoque). El descontento se manifestaba en la proporción decreciente de jóvenes inscritos en los registros electorales y en el aumento en la tasa de votos nulos registrado en la elección legislativa de 1997 (Huneus, 1999a, 1999b). De todas maneras, durante esta época el malestar todavía estaba asociado casi exclusivamente a pasividad política y no se traducían en grandes movimientos sociales que cuestionaran los cimientos del “modelo” socioeconómico vigente. Según Joignant (2009) este periodo corresponde, en términos gruesos, a una época de desafección donde se consolida la paulatina reducción (en términos relativos) del padrón electoral y la caída en los niveles de militancia e identificación política.<sup>2</sup>

Es importante notar que este proceso de desafección se mantuvo después de los 90s, y para ello a continuación mostramos cómo han evolucionado algunos indicadores de desafección política durante el periodo en cuestión. Distinguimos, por un lado, aquellos indicadores que tienen como objeto de evaluación, directa o indirectamente, a los partidos políticos, y por otro, aquellos que refieren a la política en términos más generales o difusos. Las trayectorias disímiles entre estos indicadores proveen información de contexto que ayuda a comprender mejor el proceso de autonomización de la protesta.

La figura 1 muestra la evolución entre 1990 y 2012 de dos indicadores de desafección partidaria contenidos en la Encuesta Mundial de Valores (que se basa en una muestra representativa de adultos residentes en el país y fue aplicada en Chile en cinco ocasiones: 1990, 1996, 2000, 2006 y 2012). Los indicadores miden la propensión a mencionar un partido político por el que votaría si hubieran elecciones próximamente, y el nivel subjetivo de confianza en los partidos políticos. En forma complementaria, y para generalizar con más apoyo empírico, también mostramos (en el gráfico C, figura 1) la evolución de la proporción de la población adulta que menciona sentirse cercana o simpatizante de un partido político según la encuesta CEP entre los años 1993 y 2013. En los tres casos se observa una caída sistemática en los niveles de apoyo a los partidos políticos chilenos.

---

<sup>2</sup> Para Joignant (2009) a partir del año 2000 surge una nueva etapa de malestar en donde la desafección se traduce en formas de rabia hacia las elites. Ello se profundiza a partir de marzo de 2010 con el comienzo del gobierno de Piñera, en el que aumenta drásticamente la cantidad de eventos dirigidos contra las élites.

Mientras que en 1990 casi un 80% de la población mencionaba que votaría por algún partido, en el año 2012 estos números se redujeron a un 52%. En forma similar, mientras que en 1990 casi la mitad de los encuestados mencionaban tener ‘mucho’ o ‘algo’ de confianza en los partidos políticos, en la medición del 2012 esta cifra se redujo a un 17%. Por último, la caída en los niveles de identificación partidaria muestra patrones más drásticos aun. Mientras que en 1993 un 83% de la población se sentía cercana o simpatizante de un partido, la cifra se reduce a un 32% en el 2013. Ciertamente la caída en los niveles de desafección partidaria no son necesariamente lineales; la confianza en los partidos cayó en forma más drástica entre los años 1990 y 1996 que en el periodo posterior. Igualmente, la evolución de los niveles de identificación partidaria sugiere un patrón cíclico de parcial recuperación durante los años electorales (particularmente para el 2005). Pero más allá de los vaivenes, la tendencia generalizada es, sin duda, a una baja sistemática en los niveles de apoyo que los adultos chilenos confieren a los partidos políticos.

\*\*\*\* Aquí Figura 1 \*\*\*\*

En la figura 2 se muestra la evolución de varios indicadores de afección política difusa – no referida directamente a los partidos políticos, sino a la ‘política’ como una actividad genérica. También complementamos la información de la Encuesta Mundial de Valores con algunos indicadores de la encuesta CEP. Los indicadores de afección política difusa también tienden a registrar importantes caídas durante los primeros años después de la transición democrática. Por ejemplo, entre 1990 y 1996 el porcentaje de personas que indican que la política era importante o que estaban interesados en la política cae 10 y 18 puntos porcentuales respectivamente. Las variables contenidas la encuesta CEP, referidas al nivel de atención que los encuestados le otorgan a asuntos políticos, registran caídas más agudas aun durante el mismo lapso de tiempo. No obstante, a diferencia de los indicadores de desafección partidaria, después del periodo 1990-1995 los niveles generales de afección política se han mantenidos extraordinariamente estables, o incluso, con leves tendencia al alza como indican las variables de atención política registradas en la encuesta CEP. En suma, los partidos políticos se deterioran en la opinión pública chilena a lo largo de todo el período pero ello no va acompañado de una despolitización tan acentuada.

\*\*\*\* Aquí Figura 2 \*\*\*\*

### **2006-actualidad: masificación de la protesta estudiantil**

De manera paralela a la desafección política (y en particular partidaria) se produjo, en 2006, el fin de la relativa desmovilización en que la sociedad chilena venía experimentando desde fines de los 80s. Fue en ese año cuando los estudiantes secundarios, apodados “pingüinos” por sus uniformes escolares, pusieron en jaque al por entonces flamante gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet (Donoso 2013 para un excelente análisis del conflicto). Es importante detenerse en este conflicto dado que constituyó una “coyuntura crítica” (Collier y Collier 2002) que simbolizó una nueva forma de relacionamiento entre la política institucional y los movimientos sociales.

El conflicto se desencadenó cuando las organizaciones de estudiantes secundarios solicitaron al Ministerio de Educación la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria

(PSU) y el uso ilimitado del pase escolar. La negativa de las autoridades desencadenó la movilización en las calles y tomas de colegios. Además hubo un proceso de ampliación del petitorio, no sólo a nuevos asuntos gremiales (como el aumento de las becas de alimentación) sino a medidas más estructurales como la desmunicipalización de los colegios y la derogación de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza).

A esta ampliación de las demandas se sumó la movilización de un gran número de estudiantes que empezaban a hacer sus primeras armas en la política (aunque no en la partidaria). Los centros de estudiantes pasaron del interés en actividades recreativas – como festivales musicales – a realizar campañas informativas y debates políticos. La cohesión del movimiento no dependió de la creación de lazos con los partidos políticos – más allá de que algunos de sus voceros militasen en el Partido Socialista – sino que apuntó a la construcción de una identidad como estudiantes secundarios. Además se consolidó un estilo de organización basado en vocerías (Álvarez s/f) que dificultó la cooptación por parte de los partidos políticos (Donoso 2013).

El movimiento pingüino puso en aprietos al gobierno de Bachelet, que terminó convocando un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación integrado por 81 personalidades - incluyendo expertos en educación, líderes religiosos y de pueblos originarios, y representantes de apoderados, estudiantes y docentes, entre otros. El Consejo incorporó a varios estudiantes entre sus miembros, sentando así un precedente inédito en el diálogo del gobierno con el movimiento estudiantil, y contribuyó finalmente al remplazo de la LOCE por una nueva Ley General de Educación (LGE). Sin embargo, como era de esperar para un Consejo de composición plural, muchas de las demandas de los estudiantes secundarios no fueron llevadas a cabo (Aguilera 2009). Para el movimiento universitario que irrumpiría en el 2011, y que en parte reunía a los pingüinos maduros que habían alcanzado el nivel terciario, esto supuso un aprendizaje importante: dejó como legado una actitud de desconfianza hacia la clase política.

El movimiento estudiantil volvió masivamente a las calles en 2011 - esta vez bajo el liderazgo de los universitarios pero con una fuerte participación de los secundarios. Existían diferencias importantes respecto a la situación de 2006. Por ejemplo, en vez de un gobierno de centro izquierda liderado por una figura carismática y con clara simpatía hacia los movimientos ciudadanos (Michelle Bachelet), los estudiantes se enfrentaban a un gobierno de centro-derecha liderado por un millonario que encarnaba – junto con algunos de sus ministros como Joaquín Lavín, el de educación - todos los “pecados” del neoliberalismo.

Aunque las demandas iniciales fueron puntuales (subsidio al pase escolar y reducción de demoras en la asignación de becas), tras pocos meses de movilización comenzaron a discutirse temas más profundos. Estos iban desde la implementación de educación gratuita para todos los estratos sociales y el fin al lucro por parte de los propietarios de establecimientos educacionales, hasta una reforma impositiva para financiar nuevos recursos a la educación y una reforma constitucional. Las movilizaciones también fueron creciendo. Empezaron nucleando unas pocas centenas de estudiantes en abril del 2011 pero para julio y agosto se habían organizado marchas que, posiblemente, convocaron a varias decenas de miles en todo el país. Las demandas del movimiento, con su crítica al

funcionamiento de los mercados en la provisión de bienes y servicios, encontraron terreno fértil en escándalos en el mundo empresarial que se hicieron públicos en ese momento (como la estafa de la multitienda La Polar, la denuncia de colusión de precios en empresas avícolas, y episodios de corrupción en la Universidad del Mar que llevarían a su cierre) (Somma 2012).

El movimiento del 2011 fue el resultado de, y contribuyó a aumentar, una fuerte desconfianza de los estudiantes hacia el gobierno en particular y la clase política en general – incluyendo no solo la vinculada al gobierno de Piñera sino también la ligada a la opositora Concertación. Respecto al gobierno, los estudiantes manifestaron reiteradamente su desconfianza a la “letra chica” en las propuestas del gobierno – cláusulas poco claras que dejaban sin efecto los supuestos cambios que se proponían. Los estudiantes del 2011 posiblemente habían aprendido la lección de los pingüinos en 2006 respecto a los riesgos que implicaba entablar negociaciones con el gobierno (Von Bülow y Bidegain por aparecer).

### **Movimiento mapuche y autonomización de la protesta**

Aunque el movimiento estudiantil es posiblemente el protagonista de las mayores movilizaciones en la última década, y por eso arriba nos enfocamos en él, el caso mapuche también ilustra el progresivo debilitamiento de los vínculos entre la política institucional y los movimientos sociales. El movimiento mapuche es muy distinto al estudiantil en términos de sus demandas, amplitud de convocatoria, tácticas y receptividad de las élites políticas, pero aun así en ambos se producen procesos similares. Esto realza la importancia del proceso estudiado<sup>3</sup>.

A lo largo de los 80s existió una afinidad considerable entre la sumergida centroizquierda política y varias organizaciones mapuche. Los centros culturales mapuche de la época fueron apoyados por dirigentes y militantes del PC, el PS y la DC: el enemigo común era el régimen dictatorial. En el mismo sentido, la transición democrática generó altas expectativas para buena parte del pueblo mapuche. Durante la campaña para las elecciones de 1989 se celebró el acuerdo de Nueva Imperial donde el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, se comprometía a abordar demandas relativas a las tierras ancestrales a cambio de que los mapuche limitaran las tomas de tierras. Bajo Aylwin se realizaron mejoras atendibles en la situación de los indígenas mediante la creación del Fondo de Aguas y Tierras y la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (CONADI). Varios dirigentes de la organización mapuche ADMAPU ocuparon puestos en el gobierno de Aylwin, incluyendo en la CONADI.

La relación entre el movimiento mapuche y la clase política concertacionista se deterioró en 1997, cuando el presidente Frei removió al director de la CONADI y varios de sus integrantes que se oponían a la construcción de una nueva central hidroeléctrica de la empresa Endesa en el río Bío Bío. Esto alejó a varios dirigentes mapuche de los organismos y políticas estatales. Sumado a otras desavenencias que venían arrastrándose desde los años

---

<sup>3</sup> La narrativa que sigue sobre el movimiento mapuche se basa en Klein (2008), Aylwin (2000), Carruthers y Rodríguez (2009), Toledo Llancaqueo (2007), Whitham (2006) y Mariman (1995).

anteriores (como el conflicto en Lumaco de 1997), a fines de los 90s cristalizó la desilusión de vastos sectores del mundo mapuche con el gobierno concertacionista. Las protestas se radicalizaron, la represión aumentó y los manifestantes fueron criminalizados.

La situación de desconfianza se acrecentó en las administraciones posteriores de Lagos, Bachelet y Piñera. Ni la ratificación del convenio 169 de la OIT (que exige a los gobiernos respetar los derechos de los pueblos indígenas), ni las diversas comisiones presidenciales orientadas a disminuir la conflictividad, pudieron mejorar sustantivamente las relaciones. La utilización recurrente de leyes de seguridad interna y antiterrorista para tratar a los militantes mapuche ciertamente no ayudó a restablecer el tipo de confianza y afinidad que, bajo circunstancias muy distintas, se había producido en los 80s. A todo esto se suma el surgimiento de organizaciones más radicalizadas y con demandas autonomistas como la Coordinadora Arauco Malleco o la Asamblea Mapuche de Izquierda, así como el fracaso de los intentos de creación de un partido político mapuche.

Si bien el caso estudiantil y el mapuche ilustran una tendencia generalizada de debilitamiento de los vínculos entre partidos y movimientos sociales, no necesariamente ello debería ocurrir en todos los ámbitos de movilización social. Por ejemplo, puede que no ocurra (o no tan marcadamente) en el caso del movimiento sindical, donde los partidos de izquierda han mantenido una presencia importante - a menos a nivel de las dirigencias -, o en el caso de otros movimientos que surgen con fuerza en el escenario post-transición, como el movimiento homosexual (Robles 2008) o las varias protestas regionalistas. Además, como mencionamos en las conclusiones, en los últimos tres o cuatro años podrían estarse generando nuevos tipos de vínculos entre algunos movimientos y algunos actores políticos institucionales. De todas maneras creemos que la tendencia ejemplificada por los estudiantes y los pueblos originarios tiene una proyección general más allá de estos casos. Si esto es así deberíamos poder rastrear el debilitamiento de los vínculos a través del tiempo de modo sistemático y para todo tipo de protestas - incluyendo diversas tácticas y demandas. Eso es precisamente lo que hacemos a continuación.

## **2) LA AUTONOMIZACION DE LA PROTESTA EN LAS ENCUESTAS**

En esta sección documentamos el proceso de autonomización de la protesta a través de encuestas a la población adulta chilena realizadas a lo largo del período estudiado. De este modo complementamos con datos a nivel individual el diagnóstico de la sección anterior hecho a nivel de organizaciones y actores. Para esta tarea empleamos dos conceptos que pueden rastrearse a nivel individual con información de encuestas: participación en protestas y desafección política. Por protesta nos referimos a la participación de los individuos en eventos públicos destinados a expresar ante las autoridades oficiales alguna demanda o descontento colectivo, usualmente (pero no siempre) bajo la coordinación de movimientos sociales (Taylor y Van Dyke 2007). Por desafección política nos referimos a un complejo actitudinal de alejamiento e indiferencia generalizada hacia la actividad política que se manifiesta en evaluaciones críticas hacia los actores e instituciones políticas, así como al proceso político democrático (Torcal y Montero, 2006). Siguiendo a Torcal y Montero (2006), la desafección se descompone, por una parte, en indicadores de *desinvolucramiento político* tales como niveles bajos de interés en la política, baja propensión a identificarse con objetos políticos (ya sea con un partido político o posiciones

ideológicas abstractas) y baja frecuencia de discusiones políticas con amigos y familiares. Por otra parte, la desafección también involucra una *desafección institucional* que se manifiesta empíricamente por medio de niveles crecientes de desconfianza hacia las instituciones y actores políticos.

La literatura internacional ha constatado reiteradamente que quienes participan en protestas suelen mostrar niveles más altos de afección política - esto es, el opuesto a desafección política tal como se definió recién - que quienes no protestan (Barnes y Kaase 1979, Dalton 2010). Esto no es sorprendente si se considera que la protesta es una táctica política más, y que por tanto guarda similitudes importantes con otras tácticas tales como votar o participar en campañas. Además la protesta, al estar orientada a las autoridades políticas, supone la creencia de que dichas autoridades estarían dispuestas a responder a las demandas de los activistas. Esta “eficacia política” también es un componente importante de los comportamientos políticos más institucionalizados.

La literatura no suele referirse, sin embargo, al hecho de que tales asociaciones pueden cambiar en el tiempo. A esto apunta la tesis de la autonomización de la protesta: si bien las asociaciones (a nivel individual) entre afección política y protesta deberían ser relativamente fuertes en el período cercano a la transición democrática, deberían debilitarse con el paso del tiempo. En la medida que los movimientos sociales se desvinculan de la política institucional, sus seguidores y simpatizantes deberían mostrar menores niveles de afección, interés e involucramiento con la misma, y por ende deberían parecerse más al resto de la población. Esto no quiere decir que necesariamente las asociaciones entre variables deban ser inexistentes, o que el signo deba invertirse (en el sentido de que quienes no protestan sean más afectos que quienes protestan).

Para explorar este punto empleamos nuevamente la Encuesta Mundial de Valores. Consideramos cinco indicadores de desafección política (que, como vimos arriba, comprenden tanto el desinvolucramiento político como la desconfianza política). Los referidos a lo primero son los siguientes: 1) intención de voto por algún partido político si las elecciones fueran el próximo domingo, diferenciando entre quienes declaran que votarían a algún partido (valor “1”) de quienes no indican partido alguno (valor “0”); 2) interés en la política, que varía de 1=nada a 4=mucho; 3) importancia de la política en la vida del encuestado, que varía de 1=nada importante a 4=muy importante, y 4) frecuencia con que conversa sobre política con amigos y familiares que varía de 1=nunca a 3=frecuentemente. Para medir confianza política, que captura la dimensión de desafección institucional distinguida por Torcal y Montero (2006), empleamos una medida de confianza en los partidos políticos que va de 1 (nada) a 4 (mucho).

Adicionalmente consideramos cinco indicadores de protesta: participación en manifestaciones autorizadas, boicots, huelgas, ocupaciones de edificios y firma de petitorios. Para todos ellos, si el entrevistado menciona haberlo hecho alguna vez se le asigna el valor “3”. Si no participó pero declara que podría hacerlo el valor es “2”. Si no lo ha hecho y declara que nunca lo haría el valor es “1”. Por tanto medimos no sólo participación efectiva sino también propensión a protestar. Esto nos parece relevante para diferenciar entre quienes son cercanos a redes de protesta (y por tanto podrían protestar si surgiera una oportunidad concreta, ver Schussman y Soule 2005) y aquellos individuos

estructural y actitudinalmente refractarios a la protesta. Tanto los indicadores de afectación política como los de protesta han sido incorporados en la Encuesta Mundial de Valores en al menos tres ocasiones, lo que nos permite estimar la pendiente con que han evolucionado las asociaciones estadísticas entre ambos tipos de variables a lo largo del tiempo.

Veamos primero el panorama en el momento de máxima ligazón entre movimientos sociales y política institucional. La Encuesta Mundial de Valores aplicada en 1990 revela fuertes asociaciones positivas entre protesta y afectación política. Quienes protestaron alguna vez, cualquiera sea la táctica que se considere, tienen niveles claramente superiores de afectación con y confianza hacia el sistema político que quienes no protestan. A modo de ejemplo, todas las correlaciones entre los cinco tipos de protesta y un indicador de interés en política se ubican sobre 0.40, e incluso algunas de ellas, como haber participado en demostraciones y huelgas, bordean el 0.60 (correlaciones policóricas)<sup>4</sup>. Estas asociaciones positivas entre protesta y afectación política son consistentes con la literatura internacional referida arriba, y por cierto con nuestra descripción de la articulación entre protesta y partidos en los 80s.

¿Pero se mantienen estas fuertes asociaciones a lo largo del tiempo? Al tener cinco indicadores de afectación política, cinco indicadores de protesta, y al menos tres encuestas para cada variable, podemos calcular varias decenas de coeficientes de asociación entre protesta y desafección política<sup>5</sup>. Para sintetizar la diversidad de información disponible construimos una base de datos con los coeficientes de correlación entre las variables de desafección y protesta. A esta base también le agregamos variables binarias que indican la variable de afectación política utilizada, la variable de protesta utilizada, y el año de la encuesta. Empleamos esta base de datos para analizar la evolución de la magnitud de las asociaciones entre protesta y desafección política a lo largo del tiempo.

La pregunta que estructura nuestro análisis refiere a si, tal como sugiere la tesis de la autonomización de la protesta, las asociaciones se debilitaron desde 1990 en adelante. La figura 3 muestra la evolución de las asociaciones. Como puede observarse, desde el año 1990 hasta la fecha se ha producido un extraordinario proceso de desacoplamiento entre los indicadores de afectación política y participación en protestas. Mientras que la correlación promedio entre todos los indicadores de afectación y protesta para 1990 era de 0.37, para el año 2000 la asociación se redujo a 0.25, y en la última encuesta alcanza 0.18. A nivel general se observa un patrón relativamente no lineal en el que la caída de la asociación estadística es particularmente acentuada entre las encuestas de 1990 y 1996, después de lo

---

<sup>4</sup> Las correlaciones policóricas estiman el nivel de asociación para variables ordinales y/o dicotómicas. No utilizamos el más comúnmente empleado índice de correlación de Pearson ya que éste asume que las variables son continuas. Esto comúnmente redundaría en una subestimación de la magnitud de la asociación entre variables de carácter ordinal y binario, tal como las que empleamos en nuestro análisis. Tal como la correlación de Pearson, las correlaciones policóricas pueden variar entre -1 (correlación negativa perfecta) y 1 (correlación positiva perfecta). Drasgow (2004) presenta una buena revisión introductoria acerca de los beneficios y supuestos asociados a esta técnica de estimación.

<sup>5</sup> Como se observa en la figura 3 hay algunos ítems que no se preguntaron en las cinco olas de la Encuesta Mundial de Valores (específicamente, participación en huelgas, ocupación de edificios y discusión de temas políticos). Esto redundaría en que el número total de correlaciones policóricas para las 10 variables incluidas en el análisis sea de 103.

cual la evolución de la gran mayoría de las asociaciones continúa declinando aunque a un ritmo menos acentuado.

\*\*\*\* Aquí Figura 3 \*\*\*\*

Formalizamos esta intuición por medio del uso de regresión multivariable. La tabla 1 incluye tres modelos estadísticos que predicen la magnitud de las correlaciones policóricas en base al tiempo.<sup>6</sup> El modelo 1 emplea solamente una especificación lineal del tiempo (que nos sirve como punto de contraste), el modelo 2 incluye una especificación cuadrática del tiempo (que busca evaluar si la caída en el tiempo sigue un patrón curvilíneo), y por último el modelo 3 emplea la especificación cuadrática pero agrega efectos fijos que controlan por los ítems con que se calcularon las asociaciones. La inclusión de estos efectos fijos captura toda la varianza atribuible a las particularidades de los ítems de encuesta, de modo que la estimación del efecto del tiempo captura la evolución promedio de las correlaciones.

El modelo 1 indica un efecto negativo del tiempo, que por sí sólo predice alrededor de un quinto de toda la varianza observada en las correlaciones. Los resultados del modelo 2 muestran un aumento importante del tamaño del término lineal (de -0.009 a -0.0171), que además permanece significativo a un nivel de confianza del 99%. En cambio, la variable de tiempo al cuadrado en el modelo 2 no es significativa, aunque su incorporación aumenta la bondad de ajuste ( $R^2$ ) en dos puntos porcentuales. Más allá de la significancia, es interesante notar que el término lineal es negativo y el cuadrático es positivo, indicando que con el paso del tiempo se reducen las correlaciones, aunque a un paso cada vez menor. Por último, las estimaciones del modelo 3 refuerzan los resultados del modelo 2, aunque en este caso la variable de tiempo al cuadrado sí deviene estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 99%. Este cambio resulta del hecho de que, al incorporar los efectos fijos asociados a los ítems con que se calcularon las correlaciones, se absorbe variación aleatoria asociada a las variables empleadas para calcular las correlaciones. Esto se ve reflejado en el importante aumento en la bondad de ajuste del modelo 3, que alcanza a predecir correctamente más del 80% de la varianza de las correlaciones policóricas.

\*\*\*\* Aquí Tabla 1 \*\*\*\*

Los efectos fijos incluidos en el modelo 3 también contienen información relevante. Indican que las correlaciones entre los tipos de protesta y el mencionar un partido político en la pregunta de intención de voto (que se emplea como categoría de referencia) es significativamente más baja que las correlaciones entre protesta y todos los demás indicadores de afección política, salvo la confianza en los partidos políticos. En cambio, el ítem de afección política que tiene las correlaciones más altas (en promedio) es el que indica el interés en política del encuestado. En otras palabras, la protesta está más alejada de los partidos políticos que de la politización difusa. Esto es consistente con el drástico aumento del rechazo a los primeros en un contexto de despolarización difusa no tan marcada. Asimismo, respecto de los tipos de protesta, las correlaciones más altas son las que incluyen la participación en manifestaciones autorizadas (que se emplea como

---

<sup>6</sup> Específicamente, la variable tiempo se calcula a partir de la resta entre el año de la encuesta y el año 1989. Además se divide este número entre 10 para obtener coeficientes con un menor número de ceros.

categoría de referencia). Todas las correlaciones que incluyen otros indicadores de protesta son, en promedio, significativamente más bajas.

Por último, y con el fin de dar una noción más intuitiva de los resultados de este modelo, graficamos en la figura 4 los valores predichos (junto con sus intervalos de confianza) de las correlaciones según el año de la encuesta. La figura muestra que las correlaciones tienden a bajar en forma monótonica hasta el año 2006, a partir del cual comienzan a estabilizarse. Es posible que esta tendencia esté ligada a la “reacción” de la clase política a las demandas ciudadanas a partir del 2011 (ver Conclusiones), pero la ausencia de una mayor cantidad de puntos de medición en el tiempo nos impide aventurar esta posibilidad en forma seria. Por el momento queda claro que las correlaciones para el periodo en cuestión tienden a mantenerse estables y, sobre todo, relativamente bajas (bordeando el nivel de 0.17).

\*\*\*\* Aquí Figura 4 \*\*\*\*

### **3) EXPLICANDO LA AUTONOMIZACIÓN DE LA PROTESTA**

¿Cómo explicar la autonomización de la protesta descrita en las dos secciones anteriores, tanto a nivel de los actores colectivos como a nivel individual? La literatura para los países desarrollados no entrega demasiadas pistas. Si bien muestra que quienes protestan son aquellos que invariablemente están más afectos a la política institucional, la pregunta por los cambios en el tiempo de la fuerza de estas relaciones está ausente. Además, en el caso chileno la autonomización de la protesta tiene lugar de manera paralela a la consolidación democrática, lo que genera un escenario que no se replica en las largamente consolidadas democracias europeas y anglosajonas.

Proponemos que la autonomización de la protesta en Chile resulta de dos procesos que se refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo. Primero, los partidos requieren cada vez menos de una fuerte articulación con los movimientos sociales para sobrevivir políticamente y lograr cuotas de poder institucional. Segundo, los movimientos sociales se alejan de los partidos porque confían cada vez menos que los últimos logren realizar los cambios que los primeros demandan, y porque los movimientos se vuelven crecientemente capaces de llevar adelante campañas de protesta sin el apoyo (en términos de recursos materiales y legitimidad) de los partidos políticos. En ambos procesos pueden identificarse diferencias claras entre el período previo y el posterior a la transición democrática – por lo que nuestro argumento puede leerse como una comparación intra-caso. Esta explicación es especulativa y provisoria: debe llevarse a cabo una investigación sistemática para validarla.

#### **Los partidos no precisan a los movimientos sociales ...**

A mediados de los 80s los partidos de oposición al régimen de Pinochet requerían de modo crucial el apoyo masivo de la ciudadanía organizada en las calles. Mientras más masivas fueran las manifestaciones contra el régimen, más legítima y sostenible era la demanda de apertura política (ver el concepto de WUNC en Tilly 2010 para una teorización de este proceso). Esto cambió cuando la vuelta a la democracia se volvió inminente y la

movilización masiva pasó a ser vista como una amenaza a la estrategia transicional. Los partidos debían movilizar a la gente en las urnas pero no en las calles.

Una vez pasada esta coyuntura inicial, las instituciones políticas post-transición ofrecieron pocos incentivos a los partidos para que construyeran lazos vigorosos con la sociedad civil organizada. Dadas las características del régimen electoral binominal, bastaba para cualquiera de las dos grandes coaliciones conseguir un tercio de los votos para asegurarse uno de los dos escaños por distrito o circunscripción – y con eso aproximadamente la mitad del Congreso (Navia, 2005; Luna y Mardones, 2010). Y para conseguir los votos necesarios para ganar la mitad del Congreso no era imprescindible recurrir a los movimientos sociales. Como en varios otros países, en Chile la población activista es desproporcionadamente joven, y los jóvenes votan con mucha menor frecuencia que los viejos, que se inscribieron masivamente en los registros electorales para el plebiscito de 1988 (Corvalán y Cox 2013). Así, los partidos políticos pudieron apuntar sus mensajes electorales a los segmentos más maduros de la ciudadanía – generalmente menos ligados a movimientos sociales - sin prestar demasiada atención a los segmentos más jóvenes y movilizados. Con esto la conquista del apoyo de los movimientos sociales dejó de ser un elemento clave en la estrategia de los partidos, como sí lo fue alguna vez en los 80s cuando había que demostrar la fuerza en las calles.

Otra característica institucional que permite entender por qué los partidos pudieron prescindir de los movimientos sociales es la virtual ausencia de elecciones primarias. Desde el retorno a la democracia los partidos prácticamente no han llevado a cabo elecciones primarias para elegir sus candidatos al Congreso<sup>7</sup>. Por el contrario, el sistema binominal incentiva a que las nominaciones dependan de cálculos realizados e implementados centralizadamente desde las dirigencias partidarias con el propósito de maximizar el total global de escaños, dejando un escaso margen de retroalimentación para los militantes partidistas – y menos aún para actores ajenos al partido. Eso ha contribuido, entre otras cosas, a una baja tasa de renovación de los liderazgos partidarios. Por ejemplo, según los resultados de las Encuesta a Élite Parlamentarias en América Latina (PELA), el 61% de los congresistas chilenos entre 1994 y 2006 estaba sirviendo su segundo o posterior periodo legislativo, mientras que el promedio de América Latina era sólo del 33% (Boletín 8, PELA). Así, los partidos políticos chilenos han devenido organizaciones relativamente clausuradas, cuyas decisiones y estrategias no se han alimentado del influjo de agentes sociales como los activistas de base, organizaciones de la sociedad civil, y de la ciudadanía en general (Siavelis, 2012; Luna y Altman, 2011).

Una tercera característica institucional que resta incentivos a los partidos para conectarse con la sociedad organizada es que la constitución chilena no ofrece la posibilidad real de que la ciudadanía se exprese a través de mecanismos de democracia directa (MDD) de alcance nacional. De hecho Chile es uno de los países de la región con más trabas para implementar MDD a nivel nacional (Altman, Agüero y Salas por aparecer; Barczak 2001;

---

<sup>7</sup> Hay algunas pocas excepciones a esta generalización. Antes de las elecciones municipales de 2012 la Concertación llevó a cabo elecciones primarias en 142 distritos de un total 345. Para las elecciones generales de 2013 Renovación Nacional realizó elecciones primarias para elegir los candidatos al Congreso en diez distritos (de un total de 60).

Altman 2005). La constitución tampoco prevé otros mecanismos de democracia directa como referéndums. Esto hace que la sociedad civil organizada sea incapaz de disputar las potestades legislativas del parlamento y amenazar con revertir sus fallos, restando incentivos a los partidos para cultivar relaciones de cooperación y alianzas con ellas. Esto contrasta, por ejemplo, con el caso uruguayo, donde la posibilidad de que las organizaciones sociales utilicen los MDD hace que los partidos deban tener un ojo puesto en las demandas sociales. Y también contrasta, por cierto, con las circunstancias del plebiscito de 1988 (irónicamente convocado por un dictador). En 1988 los partidos sí debieron tener en cuenta a las organizaciones sociales, si no para protestar en las calles, al menos para convencer a sus adherentes de votar por el NO.

En síntesis, la percepción del riesgo de un retroceso autoritario durante la transición democrática, sumado a las características institucionales de la política chilena que se desarrollaron posteriormente, aseguraron a los partidos de las dos grandes coaliciones su supervivencia política sin demasiada necesidad de atender a los movimientos sociales y otros actores sociales organizados: bastaba con seducir a un electorado atomizado y maduro.

### **... y los movimientos sociales no precisan a los partidos.**

Los movimientos sociales también tuvieron sus razones para distanciarse de los partidos políticos. Vimos arriba las circunstancias específicas para el caso del movimiento estudiantil y el mapuche, pero todo ello ocurre en un contexto más general que también afecta a otros.

En primer lugar, para que la protesta se desligue de los actores políticos tradicionales, los movimientos sociales deben ser capaces de movilizar autónomamente los recursos humanos, sociales y comunicacionales necesarios para levantar campañas sostenidas en el tiempo y el espacio (esto se deduce de la teoría de movilización de recursos en, p. ej., McCarthy y Zald 1977, y McCarthy y Edwards 2004). Esto pudo darse en la sociedad chilena contemporánea gracias al dramático aumento de los niveles educativos, la prosperidad material y la difusión de redes de comunicación e información mediante celulares e internet (en particular entre los más jóvenes), lo que permite coordinar acciones colectivas de manera inmediata y a bajo costo (Valenzuela, Arriagada y Scherman 2012). Como consecuencia, grupos descontentos que tradicionalmente no tenían los medios para protestar de manera sostenida pudieron comenzar a hacerlo sin necesidad de apoyarse en las estructuras organizacionales y comunicacionales provistas por los partidos políticos.

Íntimamente ligado a esto se encuentra el proceso que autores como Dalton y Wattenberg (2000) e Inglehart (1991, 1997) llamaron “movilización cognitiva” para los países más desarrollados (y que presumiblemente podría aplicar para Chile). La idea es que gracias a los avances educativos y comunicacionales que operan en las sociedades occidentales desde los 70s en adelante, los ciudadanos son cada vez más capaces de procesar información política y actuar (por ejemplo protestando) con independencia de claves cognitivas y heurísticas provistas por los partidos. Además de disminuir la prevalencia de las identificaciones partidarias, que es el foco de Dalton y otros, la movilización cognitiva

permite protestar por fuera de anclajes partidarios, como ocurre crecientemente en Chile en las últimas décadas.

A esto se suma, también en la línea de Dalton e Inglehart, la difusión de valores post-materialistas, que permiten a la población independizarse de las preocupaciones tradicionalmente materialistas de los partidos políticos y actuar por fuera de los mismos. En Chile las cuestiones materialistas son todavía un vector importante de la competencia partidaria (aunque posiblemente decreciente, ver Bargsted y Somma 2014), pero la ciudadanía chilena, particularmente las cohortes más jóvenes, han ido incorporando orientaciones posmaterialistas crecientemente.<sup>8</sup> Creemos que esto puede estar contribuyendo a explicar por qué la sociedad civil organizada se distancia de los partidos políticos.

En tercer lugar, la autonomización de la protesta también se vio favorecida por las condiciones infinitamente más favorables para manifestarse en democracia que durante los 80s. Protestar durante los años del terror y la represión desembozada del régimen de Pinochet era altamente costoso, pero el liderazgo de centro-izquierda, aunque clandestino y amenazado, posiblemente daba algunas garantías a los activistas de la sociedad civil. Este halo protector dejó de ser necesario desde la restauración democrática. La represión disminuyó y la protesta se legalizó, al punto que actualmente parte de la misma está claramente regulada y rutinizada (por ejemplo en base a negociaciones entre manifestantes y autoridades sobre horarios y recorridos de las marchas). Cuando el marco legal e institucional del país favorece la protesta, el apoyo puntual de los partidos se vuelve menos necesario y los movimientos sociales pueden cortar amarras. La teoría de las oportunidades políticas ha enfatizado mucho estos aspectos (Tarrow 1998), pero más en relación a los niveles globales de protesta que en relación al proceso específico de autonomización de la protesta que nosotros identificamos.

Los tres factores anteriores remiten a cómo ciertas condiciones disminuyeron los costos para que los movimientos sociales se desligaran de los partidos. Pero los movimientos sociales también tuvieron *estímulos* para hacerlo. Muchos líderes sociales esperaban que la Concertación emprendiera cambios estructurales que limaran los costos sociales de la sociedad de mercado impuesta durante la dictadura. Ello no ocurrió (o al menos no en la medida de lo esperado), generando desconfianza y descontento.

---

<sup>8</sup> Lamentablemente no hay hasta la fecha un estudio sistemático acerca de la evolución del pos materialismo valórico para el caso de Chile. No obstante, un breve análisis de la Encuesta Mundial de Valores permite confirmar que efectivamente el posmaterialismo se ha difundido en la sociedad chilena. Para esto calculamos una simple escala aditiva que suma el número de respuestas posmaterialistas que menciona cada encuestado a un conjunto de tres preguntas sobre las prioridades deseables para el país (para una descripción detallada de la escala ver Inglehart (1991), capítulo 3). Mientras que en 1990 un encuestado respondía, en promedio, 2.65 respuestas posmaterialistas (de un posible máximo de seis), en la encuesta del año 2011 este promedio aumentó a 2.8 respuestas. Más importante aun son las diferencias observables entre las distintas cohortes de nacimiento. Mientras que los encuestados nacidos antes de 1924 responden, en promedio, 2.18 respuestas posmateriales, este número crece linealmente hasta 2.88 respuestas entre aquellos nacidos en 1984 o después. Inglehart ha presentado abundante evidencia que indica que las orientaciones posmateriales tienden a ser relativamente estables a través del ciclo de vida de las personas, por lo que se puede deducir que el nivel de posmaterialismo en Chile tenderá, en la medida en que condiciones materiales de los chilenos sigan mejorando, a seguir aumentando por medio del reemplazo generacional de las cohortes más longevas.

Por otra parte, los movimientos sociales chilenos desde 1990 en adelante nunca pudieron crear partidos que respondieran a sus intereses y lograran generar cambios desde dentro de la política institucional (como sí pudieron, por ejemplo, los movimientos ecologistas europeos a través de los partidos verdes, o incluso los movimientos indigenistas latinoamericanos en Bolivia o Ecuador). Por su naturaleza escasamente proporcional, durante mucho tiempo el sistema binominal impuso obstáculos prácticamente infranqueables para llegar al congreso a terceras fuerzas que no se presentaran a elecciones dentro de alguna de las grandes coaliciones<sup>9</sup>.

En síntesis, la sociedad civil organizada tuvo problemas tanto para hacerse escuchar por los partidos preexistentes (incapaces de o reticentes a canalizar demandas sociales que cuestionaran el modelo de mercado), como para formar nuevos partidos con representación parlamentaria. Todo esto incentivó su alejamiento de la política institucional. Este doble movimiento centrífugo (por parte de los movimientos y por parte de los partidos concertacionistas) puede ayudar a comprender de manera tentativa la autonomización de la protesta.

## CONCLUSIONES

En este capítulo hemos argumentado que en la sociedad chilena contemporánea se ha producido un proceso de autonomización de la protesta, que consiste en una creciente desconexión entre los movimientos sociales y la institucionalidad política formal (en particular la de centroizquierda). Buscamos rastrear empíricamente este proceso de cambio social en dos niveles. Por una parte, consideramos desde un punto de vista histórico cómo variados movimientos sociales y los partidos de centroizquierda se han distanciado progresivamente en términos de objetivos y estrategias durante las últimas dos décadas. En forma complementaria, empleamos datos de la Encuesta Mundial de Valores para demostrar que la asociación estadística entre variadas formas de participación en protesta y múltiples indicadores de afección política han decrecido sistemáticamente con el paso del tiempo, aunque no necesariamente en forma lineal. Hemos intentado explicar, aunque con un tono más especulativo, este proceso a partir de dos elementos. En primer lugar, características específicas de la institucionalidad política imperante, tales como el sistema binomial o la ausencia de mecanismos vinculantes de democracia directa, han permitido que los principales partidos políticos chilenos aseguren su representación parlamentaria e influencia sin tener que apoyarse directamente sobre la sociedad civil organizada. Segundo, cambios en disponibilidad de recursos económicos y sociales, así como en la configuración valórica de la población, han permitido e incentivado que los mismos movimientos sociales no busquen apoyo en las estructuras partidistas tradicionales. Creemos que la autonomización de la protesta constituye un fenómeno de importancia ya que no refleja simplemente la tendencia generalizada en sociedades industriales avanzadas a protestar en

---

<sup>9</sup> Por ejemplo, desde 1990 hasta la elección parlamentaria de 2005 ningún candidato por fuera de las dos coaliciones logró ser electo al congreso (recién en 2005 se eligió al senador independiente Carlos Bianchi), si bien sí lo hicieron previamente en elecciones municipales (donde no opera el sistema binominal).

forma más regular, sino que pone de manifiesto un posible desalineamiento entre la dinámica de la institucionalidad política y la sociedad civil organizada.

A la luz de los resultados y análisis presentados en este capítulo surgen algunas nuevas preguntas que ameritan, creemos nosotros, mayor atención por parte de la comunidad académica. Una pregunta particularmente relevante refiere a la posible conexión entre el fenómeno descrito en este artículo y los procesos de socialización política que experimentan los ciudadanos. Más específicamente, hace falta comprender cuánto de la desconexión creciente entre protesta y afiliación política se concentra mayormente entre la población joven, o si por el contrario, este patrón opera en forma similar para todos los grupos etarios. Una posible hipótesis argumentaría a favor de la presencia de efectos de cohorte a través de los cuales la relación entre participación en protesta y afección política tendería a perdurar durante el ciclo la vida de las personas. En efecto, aquellas generaciones nacidas durante cierto periodo histórico (por ejemplo aquellos que vivieron la transición democrática en sus años de adolescencia) tenderían a mantener en forma estable la relación entre sus hábitos de protesta y disposiciones actitudinales, sea ésta alta o baja, más allá de cómo evoluciona la contingencia política. Si este fuera el caso la actual desconexión entre los movimientos sociales y el sistema de partidos perduraría con el paso del tiempo. Más aun, si se considera que los movimientos sociales recientes, del cual el movimiento estudiantil del 2011 constituye un ejemplo paradigmático, han demostrado una alta capacidad autonomía, coordinación y movilización, se generan condiciones que reforzarían la situación actual.

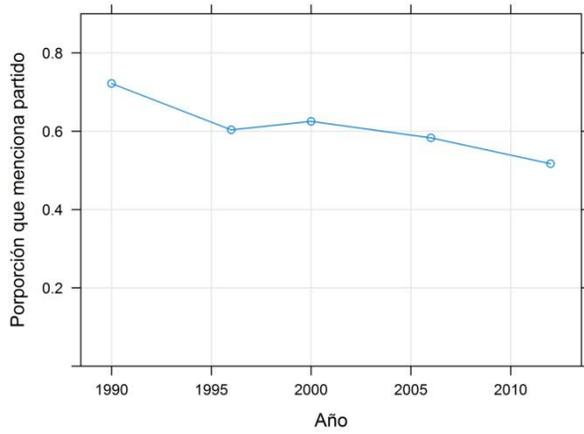
No obstante, tampoco se puede asumir que el sistema político chileno no tiene capacidad alguna de reacción ante los eventos que hemos descrito. Por ejemplo, los partidos políticos de centro e izquierda han sido capaces de cooptar un número importante de los líderes de los movimientos sociales más recientes (como Camila Vallejo, Iván Fuentes, Camilo Ballesteros y muchos más). Además hay indicios de búsqueda de reformas que permitan abrir las organizaciones partidarias a los influjos de la sociedad civil. El mejor ejemplo de lo anterior es la creciente presión entre los mismos partidos por romper con el monopolio de las dirigencias en la selección de los candidatos por medio del uso de elecciones primarias abiertas. Aunque hasta la fecha no se ha empleado este mecanismo en forma masiva, sospechamos que en el futuro cercano la presión por emplearlo aumentará, particularmente si el sistema electoral binominal es reemplazado por uno de tipo proporcional.

Si cambios en el sistema político, como los descritos recién, son efectivamente capaces de a “enraizar” a los partidos de vuelta en la sociedad chilena (Luna y Altman, 2011), es posible pensar que el actual distanciamiento entre los partidos políticos y movimientos sociales se reduzca. Incluso, y en razón de un posible proceso de recambio generacional, si las generaciones venideras encuentran más espacio en la estructura política formal, no sería extraño que volviéramos a ver lentamente una creciente conexión entre participación y afección política, aun cuando las actuales generaciones de manifestantes se mantengan recelosos y desconfiados de las organizaciones políticas formales.

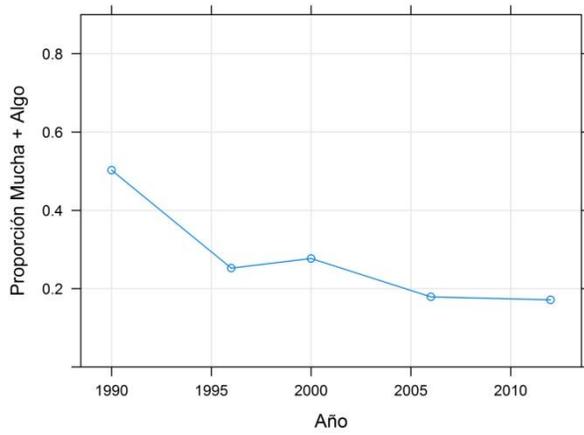


## TABLAS Y FIGURAS

A) Menciona Partido Político por el que Votaría (WVS)



B) Confianza en los Partidos Políticos (Algo + Mucho) [WVS]



C) Identificación con Partido Político (CEP)

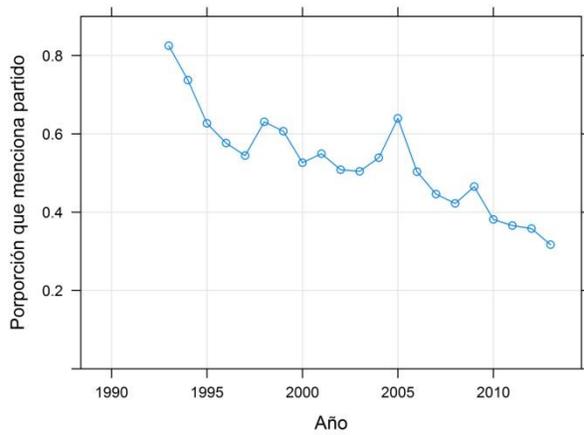
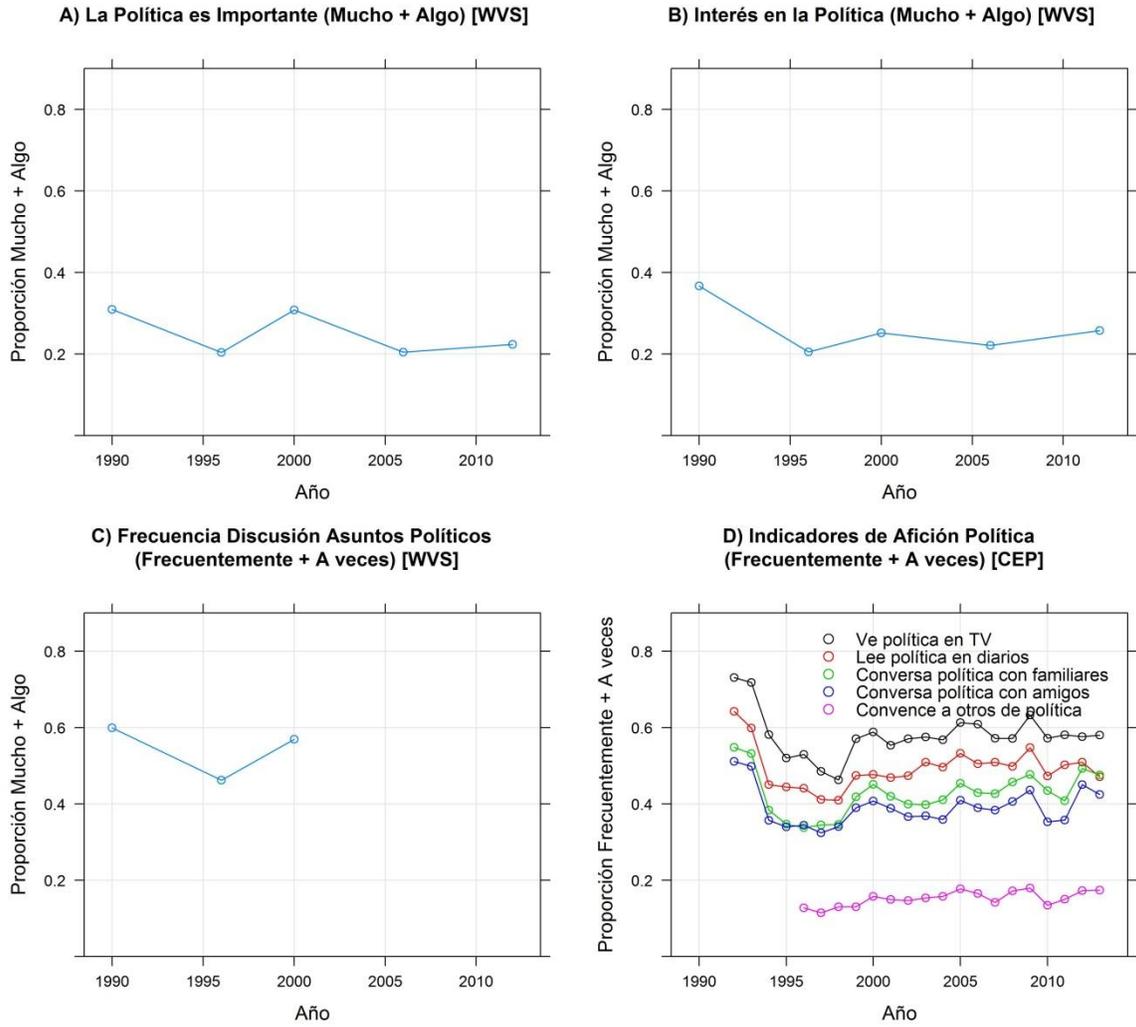
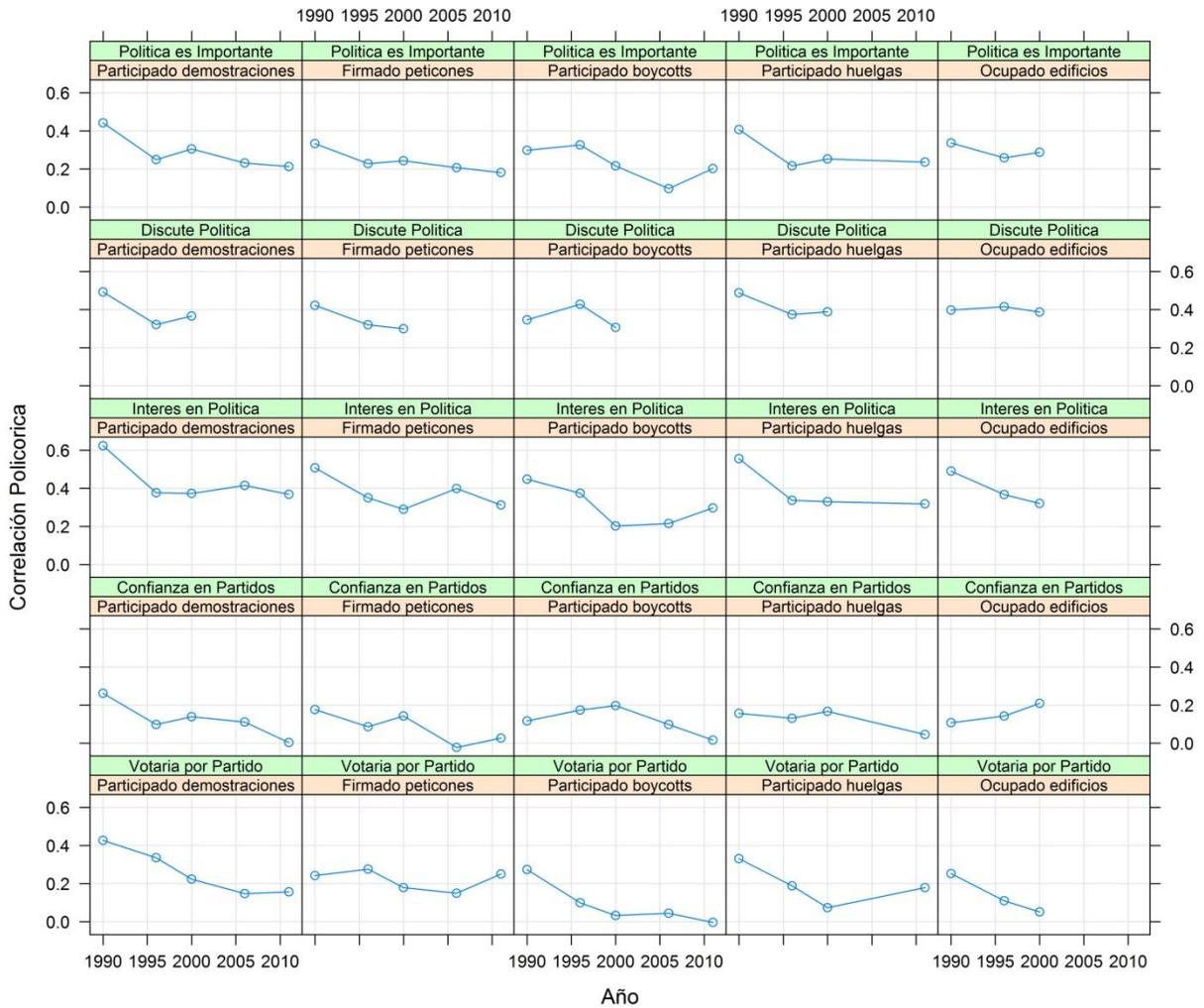


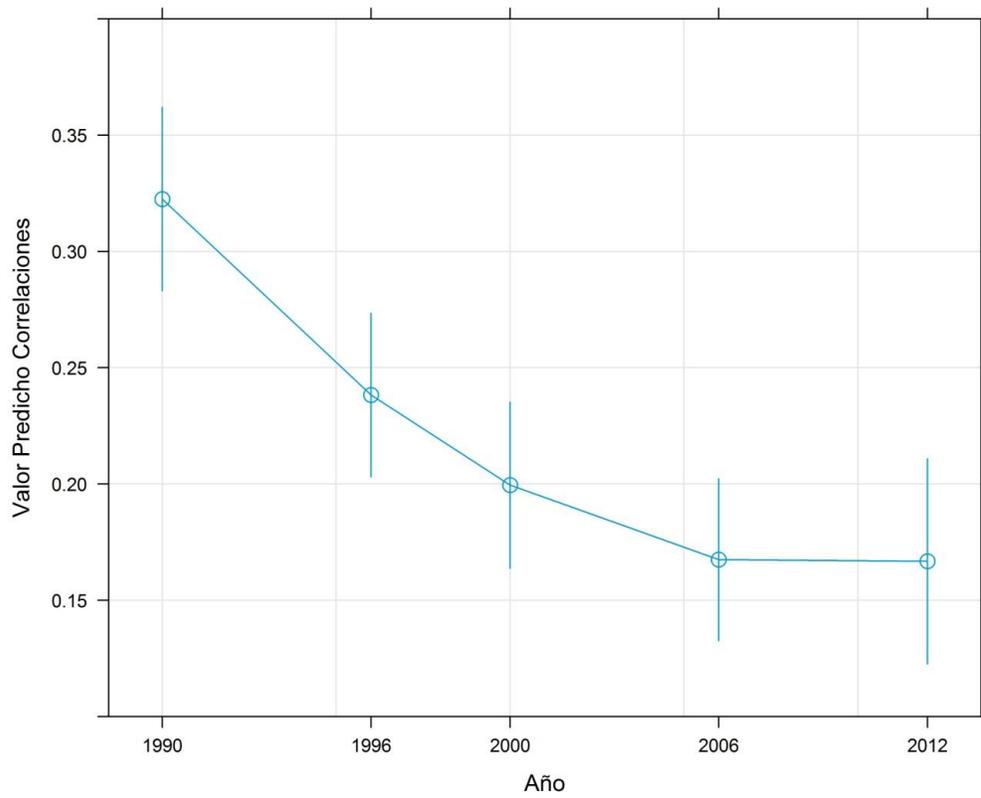
Figura 1: Indicadores de Desafección Partidista (datos ponderados)



**Figura 2: Indicadores de Política Difusa**



**Figura 3: Evolución Correlaciones Policóricas entre Participación en Protestas e Indicadores de Afección Política**



**Figura 4: Valores Predichos de Correlación Policórica entre Participación en Protestas e Indicadores de Afección Política según Año de la Encuesta.**

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
(Intercepto)	0.346 <sup>***</sup> (0.020)	0.373 <sup>***</sup> (0.027)	0.340 <sup>***</sup> (0.021)
Tiempo/10	-0.009 <sup>***</sup> (0.002)	-0.017 <sup>***</sup> (0.006)	-0.018 <sup>***</sup> (0.003)
Tiempo <sup>2</sup> /10		0.004 <sup>***</sup> (0.002)	0.004 <sup>***</sup> (0.001)
Confianza en Partidos			-0.066 <sup>***</sup> (0.018)
Interés en Política			0.193 <sup>***</sup> (0.018)
Discute Política			0.173 <sup>***</sup> (0.021)
Política es Importante			0.080 <sup>***</sup> (0.018)
Firma petitorios			-0.047 <sup>***</sup> (0.018)
Participación Boicots			-0.081 <sup>***</sup> (0.018)
Participación Huelgas			-0.033 <sup>*</sup> (0.019)
Ocupación edificios			-0.054 <sup>***</sup> (0.020)
R <sup>2</sup>	0.22	0.24	0.82
R <sup>2</sup> ajustado	0.21	0.22	0.80
Núm. observaciones	103	103	103

\*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$

Nota: La variable 'Tiempo' se divide en 10 para reducir el número de ceros del coeficiente de regresión.

**Tabla 1: Modelos de Regresión Lineal Prediciendo Correlaciones Policóricas entre Participación en Protestas e Indicadores de Afección Política según Tiempo.**

## REFERENCIAS

- Aguilera, C. (2009). Participación ciudadana en el gobierno de Bachelet: consejos asesores presidenciales. *América Latina Hoy*, 46.
- Altman, David, Soledad Agüero y Valentina Salas. Forthcoming. *Municipalidades, Ciudadanos y Democracia Directa en Chile: Esbozos de una relación fluida*.
- Altman, David. 2005. "Democracia Directa en el Continente Americano: ¿Auto-Legitimación Gubernamental o Censura Ciudadana?" *Política y Gobierno* 12 (2): 203-232.
- Alvarez, Valentina (s. f.). *Observándonos, Objetivándonos, Organizándonos Sobre la articulación en la «Revolución pingüina»*. Tesis para optar al grado de Antropóloga Social, Universidad de Chile. Recuperado 20 de agosto de 2013 de [http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/alvarez\\_v/html/index.html](http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/alvarez_v/html/index.html)
- Aylwin, J. (2000). Los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas. *Revista Perspectivas en Política, Economía y Gestión*. Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 3, 277-301.
- Barczak, M. (2001). Representation By Consultation? The Rise of Direct Democracy in Latin America. *Latin American Politics and Society*, 43(3), 37–60.
- Bargsted M.A. y Somma, N.M. Social cleavages and political dealignment in contemporary Chile, 1995–2009. *Party Politics* 1354068813514865, first published on December 30, 2013 doi:10.1177/1354068813514865
- Barnes, S., & Kaase, M. (1979). *Political action: Mass Participation in Five Western Democracies*, Sage Publications.
- Brunner, J. J. (1998). Malestar en la sociedad chilena: ¿ de qué, exactamente, estamos hablando. *Estudios Públicos*, 72, 173-198.
- Carruthers, D., & Rodríguez, P. (2009). Mapuche protest, environmental conflict and social movement linkage in Chile. *Third World Quarterly*, 30(4), 743–760.
- Collier, R. B., & Collier, D. (2002). *Shaping the political arena*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Corvalan, A., & Cox, P. (2013). Class-Biased Electoral Participation: The Youth Vote in Chile. *Latin American Politics and Society*, 55(3), 47-68.
- Dalton, R. J., y Wattenberg, M. P. (2000). *Parties without partisans: political change in advanced industrial democracies*. Oxford University Press.
- Dalton, R., Van Sickle, A., & Weldon, S. (2010). The individual–institutional nexus of protest behaviour. *British Journal of Political Science*, 40(01), 51-73.
- De la Maza, G. (2003). Sociedad civil y democracia en Chile. En A. Panfichi (editor), *Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina: Andes y Cono Sur*. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 211-240.
- De la Maza, Gonzalo. 1999. "Los Movimientos Sociales en la democratización de Chile". En Drake, Paul e Iván Jaksic (comp.), *El modelo chileno. Democracia y desarrollo*. Santiago: Lom, 1999: 377-405.
- Donoso, S. (2013). Dynamics of change in Chile: Explaining the emergence of the 2006 Pingüino movement. *Journal of Latin American Studies*, 45(01), 1-29.
- Dragow, F. (2004). Polychoric and polyserial correlations. *Encyclopedia of statistical sciences*. Editorial John Wiley & Sons, Inc.
- Edwards, B., & McCarthy, J. D. (2007). Resources and Social Movement Mobilization. En

- D. A. Snow, S. A. Soule, & H. Kriesi (Eds.), *The Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 116–152).
- Gamboa, R., Lopéz, M. A., & Baeza, J. (2013). La evolución programática de los partidos chilenos 1970-2009: De la polarización al consenso. *Revista Ciencia Política*, 33 (2), 443-467.
- Garretón, M. A. (1991). La redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución». *Estudios Públicos*, (42).
- Garretón, M. A. (1996). Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico. *Excerpta*, N° 2.
- Gonnet, M. (2008). *Mecanismos de democracia directa en Chile*. Working Paper Series, Centre for Research on Direct Democracy.
- Hipsher, P. L. (1996). Democratization and the decline of urban social movements in Chile and Spain. *Comparative Politics*, 273-297.
- Huneus, C. (1999a). Malestar y Desencanto en Chile: Legados del Autoritarismo y Costos de la Transición, Papeles de Trabajo. Programa de Estudios Prospectivos, 54, Santiago.
- Huneus, C. (1999b). Problemas de Institucionalización de los Partidos Políticos en una Nueva Democracia. El caso de Chile. *Revista Ciencia Política*, Vol XX(1), pp. 31-60.
- Inglehart, R. (1990) *Culture shift in advanced industrial society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Joignant, A. (2012). El Reclamo de las Elites: Desencanto, Desafección y Malestar en Chile. *Revista UDP*, N°9, pp.103-105
- Klein, F. (2008). Los movimientos de resistencia indígena. El caso mapuche. *Gazeta de antropología*, (24), 4.
- Lechner, N. (2000). Desafíos de un desarrollo humano: individualización y capital social. *Instituciones y desarrollo*, 7, 7-34.
- Luna, J. P., y Altman, D. (2011). Uprooted but stable: Chilean parties and the concept of party system institutionalization. *Latin American Politics and Society*, 53 (2), 1-28.
- Luna, J.P., y Mardones, R. (2010). Chile: Are the parties over? *Journal of Democracy*, Vol. 21(3), pp. 107-121.
- Marimán, J. (1995). La Organización mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam. *Denver: Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu*.
- McAdam, D. (2010). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241.
- Navia, P. (2004). Participación Electoral en Chile, 1988-2001, *Revista de Ciencia Política*, Vol. XXIV (1), pp. 81-103.
- PNUD, (1998). *Desarrollo humano en Chile. Las paradojas de la modernización*. Santiago, Chile: PNUD, 1998
- Roberts, K. M. (1998). *Deepening democracy?: the modern left and social movements in Chile and Peru*. Stanford University Press.
- Robles, V. H. (2008). *Bandera hueca: historia del movimiento homosexual de Chile*. Editorial Cuarto Propio.

- Schussman, A., & Soule, S. A. (2005). Process and protest: Accounting for individual protest participation. *Social Forces*, 84(2), 1083-1108.
- Siavelis, P. (2012). Elite-mass congruence, partidocracia and the quality of Chilean democracy. *Journal of Politics in Latin America*, Vol 1(3), 3-31.
- Somma, Nicolás M. 2012. "The Chilean student movement of 2011-2012: challenging the marketization of education". *Interface: a journal for and about social movements* 4(2):296-309.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. 2nd. Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, V., & Van dyke Nella. (2007). "Get up, Stand up": Tactical Repertoires of Social Movements. En D. A. Snow, S. A. Soule, & H. Kriesi (Eds.), *The Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 262–293). Blackwell Publishing Ltd.
- Tilly, C. (2010). *Regimes and repertoires*. University of Chicago Press.
- Toledo Llancaqueo, V. (2007). Prima ratio. Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política indígena en Chile 1990-2007. *Revista del Observatorio Social de América Latina*, (22), 253–275.
- Torcal, M. y Montero, J.R. (2006). Political disaffection in comparative perspective. En M. Torcal y J. R. Montero (Eds.), *Political Disaffection in Contemporary Democracies: Social Capital, Institutions, and Politics*. London: Routledge.
- Valenzuela, Arturo y J. Samuel Valenzuela. 1983. Los orígenes de la democracia. Reflexiones teóricas sobre el caso de Chile. *Revista del Centro de Estudios Públicos* #12, Santiago, Chile.
- Valenzuela, S., Arriagada, A., & Scherman, A. (2012). The social media basis of youth protest behavior: The case of Chile. *Journal of Communication*, 62(2), 299-314.
- Von Bülow, Marisa y Bidegain G. (por aparecer). It takes two to tango: students, political parties and protest in Chile (2005-2013). Forthcoming in Paul Almeida and Allen Cordero (eds), *Handbook of Social Movements across Latin America*, Springer.
- Whitham, D. K. (2006). El Movimiento Político Mapuche: Factores de División y Debilidad e Ideas Para el Futuro. Recuperado de [http://digitalcollections.sit.edu/isp\\_collection/386/](http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/386/)